

Martha Robles

7. Programa rural y reformas educativas

Mientras los pueblos se doblegan ante el imperio de la tecnología, en el afán de reconocerse en su doloso desarrollo económico, la enseñanza popular se convierte en tema primordial de la política educativa latinoamericana. La misión educadora se debate, ahora, entre dos finalidades extremas, aunque no necesariamente opuestas entre sí: la capacitación que demanda el desarrollo económico y, de otra parte, el fortalecimiento de la cultura para crear un hombre nuevo, creador, crítico y libre. En México, el aprendizaje ha significado, históricamente, la más ardua de las luchas por el esclarecimiento de nuestra identidad nacional: saber quiénes somos, comprender vivamente las cosas que nos rodean, se ha impuesto como necesidad para adquirir conceptos y métodos culturales y científicos para fincar, precisamente, la soberanía de la nación. Libertad y educación continúan siendo las aspiraciones de los países pobres que sobreviven a la creciente dominación de las potencias mundiales. No sólo la instrucción de todos, como se ha pensado, sino el reconocimiento reflexivo de nuestra realidad, unificará el saber con la experiencia de lo vivido y padecido durante quinientos años de historia de las mayorías marginadas a su destino creador e independiente.

Determinar el modelo de mexicano apto para la democracia, capaz de soportar los embates del subdesarrollo, ha sido el objetivo fundamental de casi una docena de programas y "reformas" educativas en el México contemporáneo.*La instrucción, en todos los casos, ha sido el elemento reactor de la política gubernamental. Si bien los propósitos educativos coinciden, en lo fundamental, con los postulados del artículo 3o. constitucional, la visión del problema y los procedimientos empleados por las autoridades educativas no han coincidido con una antigua demanda que, en la actualidad, es ya inaplazable: la integración político-cultural del país.*Es el sentido de lo que se enseña o se aprende lo que distingue a los proyectos del pasado de las aspiraciones nacionales por consolidar su verdadera soberanía,*y es también el aprendizaje reflejo de nuestra debilidad económica ante las presiones impuestas por la creciente industrialización sostenida por capitales extranjeros. Esta realidad contradictoria, entre el ideal educativo y un desarrollo determinado por intereses financieros, ha propiciado la inestabilidad permanente de nuestro sistema educativo nacional: de una parte, la norma constitucional contiene un alto ideal humano, pero como todos los enunciados no señala los procedimientos para cumplirlo y, de otra, las demandas de la acelerada capitalización imponen técnicas y métodos de instrucción destinadas al consumo de servicios.

El reto es, precisamente, elaborar el programa adecuado al ideal y a las circunstancias. Si atendemos únicamente al ideal educativo corremos el riesgo de desprendernos de la realidad y trazar un esquema perfecto para una sociedad inexistente; si, por otro lado, nos preocupamos exclusivamente de lo real sin la norma ideal que fije nuestras aspiraciones, podemos caer en el más estéril pragmatismo. Ninguna sociedad camina sin ideales, es cierto, pero también ninguna sociedad se salva sin una interpretación correcta de sus problemas inmediatos. Éste es el problema que todo programa educativo enfrenta: conservar el ideal colectivo y ajustarlo a la realidad.

Rescatar nuestra identidad nacional, mediante el fortalecimiento de nuestra cultura, y la adecuación de la enseñanza rural y crítica a nuestra heterogénea sociedad, es el camino que nos llevará a la conquista de la libertad.

En el sentido de lo que se enseña o se aprende distinguimos los proyectos del pasado de las aspiraciones del pueblo por consolidar un sistema democrático. No todas las tentativas han respondido a las necesidades nacionales: sucede que algunas medidas fundadas en los problemas del país han sido desechadas, porque, de realizarlas, pondrían en grave riesgo los intereses creados por grupos o personas. Cabe agregar, además, que desde hace algunos lustros, en México como en Latinoamérica, diversas fundaciones vinculadas a empresas transnacionales —verdaderos brazos culturales de penetración educativa— sufragan programas, reúnen hombres y mujeres capaces para emprender estudios cuyas conclusiones no se ajustan las más de las veces a las necesidades de nuestros países. Dos ejemplos: el llamado *Plan Columbia*, en la época de Truman, y las investigaciones sobre demografía, hace 2 años. En muchos aspectos podemos comprobar que una política anunciada con fervor, aplicada con entusiasmo y divulgada como necesidad inaplazable, se ha dejado en unos cuantos meses, se ha olvidado y aun omitido en los discursos oficiales. El origen de la deficiencia actual de nuestro sistema educativo proviene de que la educación, como medio de formación nacional, ha tocado los sitios sensibles de la estructura social mexicana.

Con recursos y condiciones pedagógicos y culturales depurados, el problema fundamental de la educación, bajo la responsabilidad del Estado, persiste de la misma manera que en 1805, cuando Hidalgo percibió el dolor de su pueblo colonizado: la desintegración de su cultura. El programa del cura de Dolores era de largo alcance: enseñar el cultivo de la seda significaba arrancar un privilegio a España; enseñar, sencillamente, apartar de la dominación impuesta por la ignorancia y el temor a los mexicanos; programa educativo, sí, y programa rural. Por ello Alfonso Reyes vio a Hidalgo como un héroe virgiliano: el hombre que partía de la tierra, de su cultivo, de la sabiduría natural para construir una patria. Con la verdadera independencia adquirimos la noción de que sin educar a todos no habría país libre. La lección de Hidalgo sería, en las generaciones siguientes, un móvil de lucha constante: su influencia es definitiva en las deliberaciones de los constituyentes de 1824, año en que las proposiciones lancasterianas se divulgan y forman parte del programa educativo. En los prolegómenos del liberalismo, los diez

meses del gobierno de Gómez Farías son, fundamentalmente, programa educativo: mediante leyes, decretos y acuerdos esenciales, se procura cambiar el orden colonial del país por un orden propiamente mexicano. Gómez Farías se rodeó de un grupo de educadores en torno de los cuales José María Luis Mora contempló la reforma política como reforma educativa. La sociedad colonial, las instituciones heredadas de España, no podrían vencerse sin hombres nuevos. El liberalismo es, en su raíz misma, al menos en México, un programa de educación: en él termina y en él principiaría el país que se anhelaba organizar: libre y soberano. La democracia sería imposible sin el conocimiento de lo que significa el gobierno de todos y para todos. Los hombres de nuestro siglo XIX no hacían otra cosa que aplicar una labor similar a la seguida por España en el siglo XVI: saber para entender la realidad, conocerla para educar a las nuevas generaciones conforme las nuevas instituciones; abolir lo que se oponía radicalmente a lo español a través de conceptos, ideas y propósitos sociales distintos. La colonia fue, inicialmente, una obra educativa y, precisamente, rural. Los misioneros lo fueron del pueblo, de la gente común, de los hombres de las tareas más directas y apegadas a la tierra. Se trató, por sobre todo, de una educación para campesinos. Por ello, hacia los años veinte, las misiones laicas tenían como inspiración histórica las misiones del siglo XVI. Entre una y otra empresa podemos ver, ahora, dos tentativas diferentes sobre un mismo propósito: educar para construir un sistema social, educar para sostenerlo; formar un hombre para una sociedad y un destino colectivo.

El hombre americano anhelado por José Martí no puede apartarse de la visión de la raza cósmica de Vasconcelos, "el caballero del alfabeto" como diría de él Reyes. Aspiración educativa y profundamente política: su proyecto de educación estuvo fincado en los pilares de la cultura universal y sostenido por el ideal de formar un hombre creativo y apto para la democracia. Maestros, libros y arte, serían los sustitutos de los soldados de la revolución: simientes de un mestizaje libre de las ataduras de la conciencia y de la mente, hasta hacer perdurable la conquista de la tierra; si ésta era consecuencia de la lucha armada, la educación para la libertad debía ser su complemento; de nada valdría la derrota militar ni la nueva legislación para una nación diferente sin las conciencias despertadas al saber y la claridad frente al país.

Toda revolución, para serlo en verdad, es decir, para volverse una nueva etapa histórica, tiene que convertirse en programa educativo. Lo mismo hizo el feudalismo que la burguesía; lo mismo, ahora, los países socialistas: en la educación tienen su mayor empeño, y de toda esta labor surge la rural como la más urgente, en pueblos en los que domina la producción agrícola; más aún: en pueblos que, para industrializarse, requieren de instruir a los campesinos y futuros obreros.

Estamos ahora, en México, en una vuelta del tiempo: la educación rural se propone en una crisis económica, cuando la nación necesita, inaplazablemente, reponerse de desaciertos y omisiones, de promesas lanzadas y no cumplidas; etapa de déficit, de deudas y descrédito. Esa educación rural podría

ser el medio de levantar a millones de mexicanos para comprender su presente y disponer de su propio futuro. Si consideramos el programa rural como el propósito integrador de nuestro desarrollo, no podemos apartarnos de las consecuencias de una realidad aplastante: el creciente desequilibrio entre los servicios de educación en el campo y las ciudades. Por cada cinco niños que concluyen la primaria en la ciudad, sólo uno lo consigue en el sector rural. El promedio de escolaridad entre los grupos marginados no alcanza siquiera los tres años. Bibliotecas, actividades culturales y procedimientos pedagógicos adecuados son elementos de lujo inalcanzables, aún, por la población rural. El sueño educativo es el ideal paralelo al de la justa distribución y adecuada productividad de la tierra.

*La Secretaría de Educación Pública ha tenido una clara preocupación por el establecimiento de nuevas instituciones, como respuesta a las demandas y presiones de la industrialización. Escolarizar, y no educar, se ha instituido norma de acción cuantitativa y no como medio transformador de una sociedad cuya población mayoritaria es menor a los dieciocho años de edad. Si bien la construcción de escuelas y la apertura de nuevas plazas magisteriales ha sido un claro propósito de la política oficial, el complemento cualitativo para su eficaz rendimiento se ha abandonado: investigación y experimentación de técnicas y procedimientos pedagógicos, análisis cuidadoso del contenido de los textos, señalamiento de objetivos, valorar el rendimiento escolar, determinación de medidas preventivas ante la alarmante deserción estudiantil en todos los niveles de la enseñanza, innovaciones a los programas de formación y actualización de maestros, etcétera. De nada sirve mencionar cifras aclaratorias de la utilización del presupuesto federal si la realidad nos demuestra, día con día, un resultado desalentador: el estado de la situación educativa nacional refleja la desintegración social de nuestro sistema. Más que elemento transformador, el proceso educativo actúa como sostén del régimen de injusticia que lo genera. De ahí que, en México, sólo podemos hablar de "Reformas Educativas" cuando se han acompañado de transformaciones políticas. Proyectos, programas y estrategias, sí, aunque incongruentes con las verdaderas necesidades del desarrollo y de la población. Si el país se orienta por la creciente influencia de un capitalismo dependiente está propiciando a la vez los medios de su destrucción como la nación libre e independiente que puede ser.

La educación rural sería el medio de levantar a millones de mexicanos para comprender su presente y disponer de su propio futuro. El programa rural se opone al éxodo de campesinos, favorecido por el auge industrializador y el incremento de capital extranjero. Si hemos de transformar —y la tarea es inaplazable— la agricultura tradicional, será necesario contar con una nueva generación instruida en prácticas distintas para las labores del campo; si hemos de proseguir la industrialización, será menester obreros especializados, conscientes de la trascendencia histórica de su función social y económica; si hemos de tener escuelas mejores y no meros reductos de jóvenes desempleados, hemos de tener una población educada, formada en un programa que cubra todas las edades y todos los sitios del país. Sin educación no habrá

revolución agrícola ni revolución industrial. Un país sin tierras para los pueblos y de tierras en pocas manos produjo el país de los peones; un país educado en unas cuantas clases o sectores, con una mayoría de analfabetos y monolingües ha construido una nación independiente, sí, pero cada vez más atada a las decisiones externas y a la fluctuación del precio de las materias primas.

La educación no es panacea, pero sí el principio fundamental de la transformación de la vida. Y si educar conlleva un proceso de cambio no podemos pasar por alto los tres grandes modelos de reformas educativas surgidos de sociedades con objetivos precisos: la norteamericana y su aspiración tecnológica; la cubana, como ensayo unificador de una sociedad en busca de su verdadera identidad nacional, y la china, representante de una estrategia innovadora en su concepción de desarrollo fincado en la producción agrícola y en una revolución ininterrumpida en la cultura. De estas tres formas de concebir el progreso independiente, es la norteamericana la de mayor influencia en nuestro sistema mexicano. Sus metas son, cada día, más coincidentes con la tecnificación de la sociedad mexicana, con la diferencia de que mientras los Estados Unidos son autosuficientes en su producción, nuestro país está sujeto a sus demandas y controlado en sus recursos humanos materiales y financieros.

Es característica de América Latina el que sus recursos naturales —tierra, bosques, agua y, sobre todo, la fuerza de trabajo rural— sean explotados y utilizados en forma ineficaz. Ernesto Feder señala en sus estudios sobre la destrucción del campesinado que el mal uso de los recursos físicos y humanos es consecuencia de un sistema de tenencia de la tierra, el agua, el trabajo y otros insumos; sistema que, ante la ausencia de normas que los regulen, conduce necesariamente a una concentración siempre creciente de la propiedad, la producción y el ingreso.

La racionalización del sistema económico es, con frecuencia, una recomendación ideal, inaplicable, porque intentarlo siquiera provoca exigencias sociales de cambio o móviles de acciones revolucionarias. La reforma social, es decir, la forma legal, pacífica, de emprender cambios económicos que permitan la formación de un nuevo hombre, ha sido, en Latinoamérica, una experiencia dolorosa: el ejemplo más cercano, el de la política de Salvador Allende. En Chile hubo revisión educativa a la par que una empresa económica y social. Eran realidades y planteamientos; el fin lo sabemos todos: regresión y vuelta al modelo de hombres que no se compadece ni con el forjado en el liberalismo. Las conquistas más arduas de nuestros antepasados se han convertido en temas prohibidos. Es verdad lo que en Estados Unidos ocurre frente al pavor anticomunista: no es, exactamente, la persecución de los comunistas lo que se emprendió y queda como rescoldo de miedo y agresión, sino el temor ante el propio pasado liberal. Lo que se ataca no es a Lenin, sino a Jefferson. Lo que se persigue en muchos países latinoamericanos no es la lección de Fidel Castro o de Sandino, sino los postulados de Bolívar o San Martín; las libertades fundamentales que son peligrosas para sistemas represivos. Por eso la educación en libertad y para la libertad es el verdadero

programa de nuestros países, a tal punto que parece que volvemos a las tesis del pasado para poder asegurar en el presente lo que deseamos para el porvenir.

En términos abstractos, el dilema no tendría solución alguna; la reforma educativa sólo es posible si existe una reforma social y económica, y si ésta, como en el caso de Latinoamérica, depende de una organización continental que, a su vez, comparte el mundo en dos grandes zonas de influencia, el resquicio para aplicar la reforma educativa es mínimo, casi imposible de alcanzarlo. Pero la abstracción de la realidad, bien lo sabemos, es un recurso intelectual para fijar los términos extremos de un problema y, a partir de ellos, establecer las alternativas probables conforme los datos de la realidad. En el caso de la educación en México podemos aclarar lo siguiente: si necesitamos, para fortalecer nuestro desarrollo autónomo, una educación rural más vasta y persistente, hemos de reemprender la vía de la revolución mexicana, en cuya constitución se dispone del medio legal para implantar reformas que contemplan un desarrollo independiente y una mayor justicia en lo social; es decir, en lo económico. Decir volver a los pasos de la revolución parece conformatorio de un ciclo histórico y, sin embargo, es un salto histórico, porque desde hace cerca de 40 años lo que nuestro país ha consumado es la negación de los principios y metas de su revolución, que fue, y quiso ser, nacional, democrática y antimperialista.

La educación mexicana, en su mejor momento, estableció las normas y los modos de formar un mexicano capaz de sostener el crecimiento económico derivado de una reforma agraria y de una política internacional que expresaba esa voluntad de la nación. Al detenerse la reforma o desviársela de sus fines esenciales, se detuvo también la obra educativa, principalmente la rural, dedicándose recursos y métodos al adiestramiento de las clases medias para el proceso industrial y comercial. Habríamos llegado a esta etapa simultáneamente, o por ciclos, no necesariamente como llegamos: dejando en un pasado ideal la educación de nuestros campesinos y dedicándonos a la instrucción en las ciudades. El costo social es muy alto: en él se refleja, por entero, la situación de México: desniveles educativos y económicos que se complementan en la realidad de nuestro atraso y riesgo de dependencia.

Esta realidad puede ser rota por dos medios fundamentales: un programa de gobierno que corrija la obra precedente por medio estrictamente político, o un programa económico, derivado del hallazgo y comercialización de nuestros recursos naturales, que dé al gobierno de la república mayores medios para emprender obras indispensables en el campo, en la industrialización estatal y en la labor educativa: programas que son uno solo: rectificar lo económico y fijar el modelo de hombre que requiere un país como el nuestro, en lucha constante por su bienestar e independencia: nacional por su forma, y universal por el contenido y su cultura.